

*Una cuestión como la que nos ocupa no es un problema específico de técnica canónica; hay en ella involucrada una cuestión de justicia, que se enlaza con la capacidad de la mujer para la función judicial y con la igualdad en la capacidad jurídica entre varones y mujeres. Por esta razón se cierran estas encuestas con una dirigida a juristas españoles dedicados a distintas ramas de la ciencia jurídica.*

# Encuesta a juristas españoles

## PREGUNTA

El reciente m. p. «Causas matrimoniales» admite que los laicos pueden intervenir como jueces en los procesos matrimoniales, en determinadas circunstancias; pero se establece también que sólo podrán ser llamados a ejercer dicha función judicial los laicos que sean varones, excluyendo, por tanto, a las mujeres, a quienes se admite sólo como notarios de los Tribunales eclesiásticos.

En la línea de los principios de justicia, ¿cree Vd. que la exclusión de las mujeres respecto de la función judicial puede considerarse aceptable?

## José Delgado Pinto

*Catedrático de Filosofía del Derecho  
Universidad de Salamanca*

En la línea de los principios de justicia —por utilizar los mismos términos de la pregunta— creo que no es aceptable la exclusión de las mujeres del ejercicio de la función judicial. Antes de razonar brevemente esta respuesta es necesario precisarla, matizarla.

Como la pregunta está formulada en forma abstracta, también la respuesta vale sólo en abstracto. Si se quiere atribuir a ésta valor práctico, la cuestión debería plantearse incluyendo la referencia a circunstancias histórico-sociales que pueden condicionar la valoración. En este sentido, por ejemplo, nuestra respuesta formulada en términos más precisos rezaría así: conforme a los principios de la justicia no debe haber discriminación entre hombre y mujer respecto de la posibilidad de desempeñar funciones judiciales siempre que el desarrollo cultural —entendiendo cultura en su sentido más amplio y profundo— de ambos sexos sea fundamentalmente equivalente; si, por el contrario, en una sociedad, histórica o actual, la mujer se encuentra en una situación de notable inferioridad o atraso cultural respecto al varón, no parece que sea injusto el vedarle el acceso al ejercicio de la judicatura. Se dirá que la situación de atrofia cultural del sexo femenino es injusta y tal valoración en principio es acertada, pero mientras subsista dicha situación el juicio que hemos formulado seguirá siendo válido. Y es que, salvo en lo relativo a algunas opciones básicas cuya solución norma-

tiva es condición sin la que sería imposible toda convivencia humana pacífica, el dictamen sobre la justicia o injusticia de conductas o relaciones interhumanas debe siempre tener en cuenta los datos de la situación histórico-social concreta; en otro caso dicho dictamen sólo valdrá en abstracto, esto es, no será falso pero sí ambiguo, equívoco, si de él se quiere extraer consecuencias prácticas.

Aclarado lo anterior, ¿en qué basamos la afirmación de la igualdad de derechos de hombre y mujer en orden al ejercicio de funciones judiciales? En que, a nuestro parecer, la diferencia de sexo no constituye un factor negativo de ninguna de las condiciones que se pueden estimar como básicamente necesarias para dicho ejercicio. Tales condiciones podríamos, quizá, reducirlas a las siguientes: a) poseer esa peculiar facultad intelectual-emocional que llamamos el sentimiento de lo justo y de lo injusto; b) poseer una instrucción suficiente, bien general, bien específicamente jurídica, para completar y orientar dicho sentimiento; c) poseer un equilibrio psíquico en cuya virtud la apreciación y el mantenimiento de la justicia no se doblegue en uno u otro sentido por el influjo de cualesquiera tendencias emocionales. Pues bien, si desechamos prejuicios que la ciencia no puede confirmar, hemos de admitir que ninguna de las condiciones citadas depende de la diferencia de sexo, sino más bien de circunstancias de índole varia que tanto pueden concurrir en el hombre como en la mujer.

Finalmente, ligada a la cuestión de la justicia está la de la conveniencia. A este respecto creemos que tratándose de órganos que han de enjuiciar conflictos relativos a la institución matrimonial, la intervención

de la mujer puede aportar enfoques y valoraciones de gran interés por complementarios de los del hombre. Por esto, en suma, en aquellas sociedades en que el desarrollo cultural de ambos sexos es fundamentalmente equivalente y en que la mujer se in-

corpora progresivamente al desempeño de tareas de transcendencia pública, su admisión como posible juez en procesos matrimoniales nos parece que correspondería no sólo a las exigencias de la justicia, sino también a las de conveniencia y utilidad.

## **Gabriel García Cantero**

*Catedrático de Derecho Civil*

*Facultad de Derecho de San Sebastián*

Considero que no hay razones fundamentales para que «de jure», la mujer no pueda desempeñar funciones judiciales en los Tribunales eclesiásticos. Si acudimos a la analogía con los Tribunales civiles, comprobaremos que, recientemente, se ha levantado

en España, la prohibición de que la mujer sea juez civil.

Otra cosa será que, «de facto» se tarde algún tiempo en conseguir que la mujer ingrese en la carrera judicial con cierta normalidad y no esporádica y aún anecdótica. No parece próximo el momento en que la mujer asuma, de hecho, en la hipótesis de que legalmente se le permita, tales funciones jurisdiccionales en el ámbito eclesiástico. Personalmente desearía que fuera pronto.

## **Pablo García-Manzano**

*Magistrado*

*Presidente de Sala de lo*

*Contencioso-administrativo*

*Audiencia Territorial de Pamplona*

En un plano de generalidad, no parece aventurado afirmar que no existe principio de justicia alguno en base al que negar el ac-

ceso de la mujer a tareas judiciales, cualquiera que sea el órgano jurisdiccional en que aquéllas se ejerciten. Por el contrario, la provisión de cargos públicos y de puestos de trabajo dentro de la función pública, en sus variadas manifestaciones y esferas, es hoy realizada, en los Ordenamientos jurídicos actuales, bajo el principio de absoluta equiparación de sexos. Esta es una tendencia hoy vigorizada en presencia de una rea-

lidad sociológica ineludible, la de nuestros días, que pone de manifiesto una integración progresivamente intensa de la mujer en ámbitos profesionales hasta ahora ajenos a la misma.

En otro orden de cosas, la exclusión de la mujer de los Tribunales eclesiásticos, en cuanto que pueden ser llamados laicos para integrar, en determinadas circunstancias, dichos Tribunales, no se armoniza bien con el principio proclamado, dentro de la doctrina magisterial de la Iglesia, por la Carta Encíclica «*Pacem in Terris*», en cuyo texto, al enunciar los «Derechos referentes a los valores morales y culturales» se hace explícita alusión al derecho de los hombres a ocupar puestos y responsabilidades en la vida social conforme a sus aptitudes y a las capacidades adquiridas. Por ello, como no cabe predicar de la mujer una genérica ineptitud para las funciones judiciales, tal exclusión viene a contradecir el mencionado principio.

Pienso, por otra parte, que si el *Motu proprio* a que alude la pregunta permite, en ciertas situaciones y en los procesos matrimoniales, la adscripción de jueces laicos a los Tribunales de la jurisdicción canónica, la llamada de tales laicos ha de ser hecha sin prescindir de su régimen jurídico propio, es decir, con aplicación —en cuanto al ejercicio de dicha función— de su Ordenamiento jurídico común, aquel que les señala deberes y derechos en cuanto ciudadanos o administrados. Partiendo de esta básica afirmación, la conclusión positiva, en orden a entender procedente la participación de la mujer en funciones jurisdiccionales, adquiere todo su vigor cuando se la contrasta con nuestro Ordenamiento jurídico positivo. Así, el Derecho público de nuestros días se inor-

dina, de forma creciente, a dicha participación de la mujer en los cargos y funciones públicas, debiendo en este punto de hacerse expresa referencia a la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer.

Bien es verdad que esta Ley vedaba el acceso de la mujer a los puestos de Jueces, Magistrados y Fiscales, dejándole tan sólo la posibilidad de integrar las jurisdicciones especiales, tales como la Tutelar de menores y la Laboral. Mas dicha actitud restrictiva ha sido ya, hace algunos años, abandonada por virtud de la derogación expresa realizada, respecto a dicha exclusión legal, por la Ley de 28 de diciembre de 1966, cuya Exposición de Motivos, haciéndose eco de una realidad sociológica evidente, pone de relieve que han desaparecido las razones (por otra parte más convencionales que reales) invocadas para alejar a la mujer de los cargos judiciales, como pudiera ser la protección de su especial sensibilidad. La restricción para tomar parte en el ejercicio de funciones públicas sólo puede venir ya justificada, ello resulta obvio, por el especial contenido de dichas funciones, encuadradas en su mayoría en el ámbito de la Administración militar o paramilitar, en cuanto requieren empleo de fuerza física o, en general, aptitudes más vinculadas a los aspectos estrictamente biológicos.

Tal conclusión, finalmente, encuentra apoyo en el orden de los principios consagrados a nivel fundamental o constitucional. Baste aquí citar, a este respecto, preceptos tan rotundos como el principio VIII de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, así como los artículos 3 y 11 del Fuero de los Españoles.

## Alfonso García-Valdecasas

*Catedrático de Derecho Civil  
Universidad de Madrid*

No hay ningún principio de justicia que sirva de fundamento para la exclusión de las mujeres de la función judicial. En cambio es un hecho que en muchos ordenamientos jurídicos vigentes todavía se mantiene esa exclusión. Es una de tantas supervivencias de una concepción patriarcal de la sociedad que, superada totalmente como idea, subsiste, en cambio, como inercia social, más o menos acusada.

Esas supervivencias, en cuanto son circunstancias históricas de hecho, pueden inducir al legislador a estimar prudente mantener la exclusión de la mujer de la función judi-

cial para evitar males y perturbaciones. Tal ocurriría donde el admitirla viniera a chocar violentamente con costumbres y prejuicios atávicos muy arraigados.

Pero no parece que esa hipótesis merezca ser muy tomada en consideración respecto del ordenamiento jurídico canónico, el cual debe estar más libre que ningún otro de vinculaciones circunstanciales.

Acaso un factor que ha podido pesar en la limitación canónica a la función judicial de la mujer es la exclusión de ésta del orden sacerdotal. Mas ello no justifica la generalidad de la exclusión.

Desde el punto de vista de los valores que informan hoy el sentido de justicia, la exclusión de la mujer de la función judicial —insisto en ello— resulta simplemente inaceptable.

## Rafael Gibert

*Catedrático de Historia del Derecho  
Universidad de Madrid*

No; en absoluto. No admito que la diferenciación sexual deba trascender al campo del derecho y de la justicia. Aun dando por supuesto que hay hombres y mujeres, y que en todos los actos y manifestaciones de los seres humanos puede ser reflejada la nota de su sexo, la única consecuencia, que sería favorable, de que las mujeres ejercieran papeles decisivos en la esfera legal, y dentro de la misma el de jueces, podría ser la de un derecho femenino, una justicia femenina. ¿Qué tendría de malo? ¿Estamos con-

vencidos de que el derecho y la justicia masculinos son perfectos e insuperables? Recientes experiencias de gobierno y diplomacia femeninas han sido muy aceptables. Si no hay razón apreciable de orden lógico, en lo que se me alcanza, mucho menos la hay de orden histórico, en un país donde la Abadesa de las Huelgas secularmente ha ejercido jurisdicción eclesiástica (como estudió y expuso don Josemaría Escrivá de Balaguer en un libro apreciado por los historiadores del Derecho) y donde Isabel la Católica ejerció la jurisdicción civil y criminal, ésta con un denuedo que el recelo de gentes timoratas toma como un obstáculo en su proceso de canonización. Absurdo, porque ese ejercicio le permitió practicar la justicia en grado heroico.

## Aurelio Guaita

*Catedrático de Derecho Administrativo  
Universidad Autónoma de Madrid*

Realmente sorprende el peso de la inercia histórica que lleva, por ejemplo, así en el Derecho de la Iglesia como en el del Estado, y también en el seno de las estructuras sociales, a una discriminación respecto de la mujer, por lo común de signo desfavorable y, en mi opinión y ordinariamente, poco razonable o, al menos, poco razonada.

Hoy somos muy conscientes de la igualdad sustancial hombre-mujer y entendemos perfectamente que por la fe y después del bautismo «ya no hay judío o griego, siervo o libre, hombre o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús» (Gal. 3, 28).

En perfecta correlación con ese texto paulino, en nuestros días y del modo magistral más solemne, la Iglesia ha recordado y proclamado que «como todos los hombres, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen, y como, redimidos por Cristo, gozan de una misma vocación y de un mismo destino divino, se debe reconocer más y más la fundamental igualdad entre todos... toda forma de discriminación... en los derechos fundamentales de la persona, por el sexo, raza... ha de ser superada y rechazada como contraria a los designios de Dios» (GS. 29).

Es claro que esa igualdad sustancial hombre-mujer no puede llevar a cerrar los ojos ante la diversidad psicológica entre uno y otra o a ignorar la Ley divina —positiva o

natural— pero también lo es que la diversidad y diferencia específica no debe interpretarse como fuente u origen de «desnivel» en el trato jurídico sustancial. Porque las diferencias son en cualidad y no en cantidad.

Sería injusto y no acomodado a la verdad, partir del presupuesto —auténtico prejuicio— de que la mujer posee en menor grado que el hombre, las virtudes de prudencia, justicia y equidad, ciencia, etc.

Y en la medida en que las acredite, la mujer ha de ser admitida a las funciones judiciales exactamente igual que el hombre.

Al fin y al cabo, el juez inicuo era un hombre, y quien supo eficazmente pedir justicia era una mujer (Lc., 18, 1-5). También conocemos la «fortaleza» de Pilato y el prudente consejo que le dio su mujer (Mt., 27, 19).

Precisamente la Constitución pastoral *Gaudium et spes*, antes recordada, se dirige a todos los Estados y a todos los hombres, católicos o no, y sería al menos chocante que el Derecho de la Iglesia no se colocara, también en esta materia, en «primera línea».

Por lo que respecta al Derecho español, hasta tiempos recientes la mujer estaba expresamente excluida de ciertos cargos y funciones públicas (diplomacia y magistratura, por ejemplo) pero la acelerada evolución de la conciencia social, muy justa en este punto a mi modo de ver, ha hecho caer la casi totalidad de las barreras discriminatorias y, desde luego, la relativa a las funciones judiciales.

Ya el Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945) estableció en su art. 11 que «todos



los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad».

El Decreto de 5 de abril de 1962 admitió ya a la mujer en la carrera diplomática, pero las disposiciones fundamentales que dieron cumplimiento al citado principio del Fuero de los Españoles son las Leyes de 22 de julio de 1961 y 28 de diciembre de 1966: por la primera de ellas se suprimen «restricciones y discriminaciones basadas en situaciones sociológicas que pertenecen al pasado, y que no se compaginan ni con la formación y capacidad de la mujer española ni con su promoción evidente a puestos y tareas de trabajo y de responsabilidad... En cuanto al sexo, resulta evidente que por sí solo no puede implicar limitación». En consecuencia, el art. 3.º admite a la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, a todos los cargos y funciones públicas, excepción hecha de las Fuerzas Armadas, la Marina Mercante (con algunas salvedades) y «c) la Administración de Justicia en los cargos de Magistrados, Jueces y Fiscales, salvo en las jurisdicciones tutelar de menores y laboral». Estas exclusiones, según la Ley, «están basadas en hechos o circunstancias naturales de tan fácil y obvia comprensión que resulta redundante e inútil su justificación en detalle».

Quizá no requerían mayor explicación las exclusiones referentes a las Fuerzas Armadas y a la Marina Mercante que, más que diferencia suponen deferencia para la mujer. Pero no podía decirse lo mismo de la exclusión de las tareas judiciales, y tan es así, que la Ley de 28 de diciembre de 1966

derogó expresamente el transcrito párrafo c) del art. 3.º de la Ley de 1961, pues la excepción de ésta «respondió sin duda, no a la idea de una falta de capacidad de la mujer para desempeñar tales cargos, sino más bien a una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles. Los motivos de la protección que la Ley quiso dispensar a los sentimientos de la mujer deben estimarse superados por la propia realidad social y porque la mujer que se sienta llamada al ejercicio de la función judicial habrá de encontrar en ella ocasiones de satisfacción de su vocación que la compensarán de las aflicciones que pueda depararle. Siendo en definitiva las Leyes la expresión de la conciencia de la comunidad en cada momento y desaparecidas por la transformación cada vez más acelerada de la sociedad española las circunstancias tenidas en cuenta cuando fue promulgada la Ley de 22 de julio de 1961, se considera llegado el momento de la total equiparación en este aspecto de la mujer al varón». Y, en efecto, son ya varias las mujeres incorporadas a las funciones judiciales en España.

Y a fortiori: precisamente en las causas o procesos matrimoniales es donde menos justificada estaría la exclusión de la mujer. Sus puntos de vista y su psicología son o pueden ser distintos de los del hombre, pero tal distinción, lejos de ser inconveniente es un complemento necesario o, cuando menos, utilísimo, pues objeto y fin del juicio son precisamente unas relaciones concretas hombre-mujer.

## Antonio Hernández Gil

*Catedrático de Derecho Civil  
Universidad de Madrid*

Mi respuesta es decididamente negativa. El círculo de las exclusiones del sexo femenino va gradualmente reduciéndose en la ordenación jurídica. El desarrollo del proceso sólo es concebible en el sentido de la progresiva identificación, salvo cuando las diferencias estén fundadas en exigencias de una base natural o moral ineludibles en el seno de una determinada conciencia histórica. Por lo que concierne al ejercicio de la función judicial, más aún cuando ésta versa

sobre el conocimiento de las causas matrimoniales, no se aprecia razón atendible para que, haciéndose extensiva la función a los laicos, no figuren entre ellos las mujeres. La extensión al laicado del cometido judicial encontraría una justificación más completa con la presencia de la mujer. Tan importante como dar entrada a los laicos hubiera sido incorporar aquélla al ejercicio de una función que recae sobre la relación matrimonial, de la cual es elemento indispensable la mujer. Pienso incluso que, de no hacerlo así, hubiera resultado quizá preferible no introducir la modificación. Porque ésta ha dado lugar a un criterio discriminatorio de difícil justificación en la hora presente.

## Enrique Medina

*Magistrado del Tribunal Supremo*

Aunque a tan concreta pregunta sólo es procedente una respuesta igualmente concreta, se hace preciso un razonamiento que fundamente la solución que se dé, ya que de otro modo no se obtendría más que una manifestación carente de valoración y desprovista de fundamento objetivo y expresaría únicamente la postura o punto de vista subjetivo de aquel que la emitiese, e imposibilidad de acertar o descubrir la base acertada o desacertada en que descansa.

Desde el campo sociológico no se descubre nada nuevo con advertir la pujanza actual conseguida por la tendencia a equiparar a los dos sexos como capaces igualmente para desempeñar cualquier actividad o cometido; hoy no se puede mantener la diferen-

ciación entre ambos sexos más que por especialidades o peculiaridades fisiológicas que nada significan en orden a una mayor capacidad a favor de uno u otro. La vida social de la mujer ha alcanzado una intensidad que iguala la del hombre y ningún fundamento o razón encontramos para atribuir preponderancia al varón sobre la hembra o viceversa. Esto, desde luego, más que la proclamación de un principio es la etapa final de un proceso paulatino y lento que ha plasmado en la realidad que hoy percibimos como un fenómeno que se sobrepone a nosotros mismos y estamos obligados a admitir. Comprobación de esto es la reiterada producción de normas jurídicas en todos los países regulando esta uniformidad de hombres y mujeres cuando de regular sus actividades se trata y bastaría, por lo que respecta a nuestro país, como por ejemplo, desde la Ley de 22 de julio de 1961, y



las posteriores promulgadas para encarecer esta igualdad de los dos sexos, tanto en la consideración de funcionario como productor, como titular de cargos políticos, etc., para convencerse de esta certeza de la que no puede prescindirse.

Y si de estos razonamientos pasamos a los más concretos relacionados con el problema que se plantea, más fácilmente será apreciar la análoga solución adoptada por la Iglesia respecto del mismo. Las mismas religiosas son investidas de algunas funciones reservadas hasta ahora al orden clerical (dar la comunión, por ejemplo), si bien en determinadas circunstancias, pero tal determinación pone de relieve que no existe impedimento institucional para que la mujer ejerza cometidos atribuidos secularmente a los hombres exclusivamente.

Y si desde este campo concreto estudiamos el específico de servir cargos judiciales las mujeres en Tribunales eclesiásticos la respuesta acertada no puede ser diferente a la que anteriormente se apunta. No será preciso esfuerzo alguno para llegar a comprender que si el matrimonio, ya se le contemple como sacramento o como contrato, es la unión de dos seres de distinto sexo, para las finalidades de sobra conocidas, no ha-

brá Tribunal, eclesiástico o civil mejor constituido, para cuantas cuestiones se deriven de tal institución que aquel formado de personas de uno y otro sexo, para evitar, por lo menos una visión parcial del problema que haya de someterse a su resolución.

En el campo estrictamente judicial, y por lo que a nuestro derecho positivo respecta la Ley de 28 de diciembre de 1966 ha captado perfectamente el problema habilitando para el ejercicio de cargos judiciales a la mujer española y en el terreno canónico constituyente el Concilio Vaticano II, en su mensaje a las mujeres proclama su innata igualdad con el hombre, definiendo de este modo y dando solución inequívoca a la cuestión planteada; de este modo, manifestarse en contra de la participación de la mujer en estos Tribunales eclesiásticos, entiendo yo, que sería ir contra las normas conciliares. Ninguna razón encuentro de más peso que estos cauces del Vaticano II para dar solución cumplida y clara a la pregunta formulada y creo que ellos mejor que nadie nos indican el camino a seguir.

Resumiendo, pues, no sólo entiendo que es aceptable la participación de la mujer como juez en los Tribunales Eclesiásticos, sino necesaria e imprescindible.

## José Ortego

*Catedrático de Derecho Penal  
Universidad de Navarra*

No veo razón ninguna para excluir a la mujer de la función judicial. Y, por tanto, tampoco de las causas matrimoniales.

Siempre me han parecido un tanto cómicas las campañas feministas —probablemente debido a que, en su mayoría, son muy poco femeninas—, e ilusoria la pretensión de igualdad absoluta de sexos. En principio, por una razón tan elemental como evidente. Lo que por naturaleza es distinto de distinta forma debe ser tratado. El problema re-

side en precisar cuál es esa natural diferencia y limitar a ella, y sólo a ella, la diferencia de trato.

Una igualdad absoluta en el campo jurídico podría obligarme a un seguro de maternidad, cuando jamás corrí el riesgo de ser madre. Las compañías aseguradoras implantarían con júbilo este tipo de pólizas, y precedentes hay aunque no tan descarados. Por muy partidario de la igualdad que sea, no creo que haya ningún legislador dispuesto a regular mis derechos laborales durante el embarazo.

Parece también cierto que la diferencia fisiológica influye respecto a ciertas aptitudes y cualidades. Las marcas deportivas lo confirman. Por tanto, mientras el ejército tenga que saltar setos, tomar cotas y cruzar ríos, me parece lógico que se prohíba a las mujeres ser militares, aún a riesgo de frustrar la particular vocación de generala que alguna dama sienta; como lo es que quede frustrada la mía para el honroso cargo de reina madre. Habría que revisar esta prohibición si algún día la función del ejército se reduce a oprimir timbres.

Si en el campo del Derecho la igualdad ab-

soluta conduce al absurdo, tampoco parece aconsejable en otros aspectos. La uniformidad morfológica, externa, que hoy se está iniciando, es triste y monótona. La diversidad es alegre, bella.

Lo que no autorizan las naturales diferencias es un trato injusto. Impondrán unas veces ventajas que serían favor o privilegio si no estuvieran fundadas en ellas. Otras veces limitaciones.

Teniendo en cuenta lo dicho, no encuentro razón ninguna que impida a la mujer ser juez. Sus naturales diferencias en cuanto a ciertas aptitudes y cualidades creo que no afectan a las exigidas para el ejercicio de esta noble función. Saber Derecho, establecer con orden y claridad los hechos, juzgar con rectitud e independencia, es función muy propia de mujer y para ello pienso que está suficientemente dotada. Mi larga experiencia en Tribunales Tutelares de Menores me ha demostrado, no ya que pueden formar parte de los mismos, sino que no debe existir uno de dichos Tribunales sin un miembro femenino. No es un privilegio, es una necesidad. Respecto a las causas matrimoniales, ¿por qué no? Cuando, es cuestión de pura oportunidad política.

## J. Antonio Pastor Ridruejo

*Catedrático de Derecho Internacional  
Universidad de Murcia*

Entiendo que el mayor subjetivismo y la mayor inestabilidad anímica de las mujeres

—explicables por razones biológicas— les hacen en principio menos idóneas que los hombres para el desempeño de funciones judiciales. Pero en la consulta que se nos hace, se trata de órganos judiciales colegiados. Aquel inconveniente no es decisivo porque el subjetivismo y la inestabilidad fe-

meninas incidirían en menor medida en la decisión judicial.

Opino de otro lado que en las disputas matrimoniales existen reacciones condicionadas por el sexo masculino o femenino del cónyuge. La influencia del sexo en determinados aspectos del carácter y del comportamiento humano es indudable. Pues bien, un tribunal integrado exclusivamente por

varones puede llegar a no entender debidamente reacciones típicamente femeninas. En todo caso, tales reacciones —presentes sin duda, al igual que las masculinas, en los hechos subyacentes a todo litigio matrimonial— pueden ser mejor apreciadas y entendidas por una mujer que por un varón. Hacer entrar a una mujer en el tribunal puede suponer un mayor respeto al principio de igualdad de las partes en el proceso.

## Carlos Sánchez del Río y Peguero

*Catedrático de Derecho Romano  
Zaragoza*

Las cualidades de la mujer, específicamente hipertrofiadas, que, a lo largo de los siglos permanecieron como grandes invariantes sociológicas, han podido alejarla, casi por sistema de actividades que se entienden propias y exclusivas de los varones. Pero las cosas han cambiado radicalmente ante la irrupción del estamento femenino en los ámbitos de la alimentación cultural y de la formación profesional con un veloz proceso igualitario de sexos que, guste o no guste, a la vista está.

Por ello será cada vez más difícil hallar explicaciones convincentes para cualquier eliminación de la mujer, por el hecho de serlo, con respecto a funciones que requieran determinadas competencias a las que hoy

puede acceder en el mismo plano que el hombre.

La equiparación de sexos viene frenada solamente por el lógico desfase que entre ellos se observa, en nuestros estudios universitarios sobre todo, bien acusado todavía estadísticamente y que se debe de un modo natural al peso de las generaciones respectivas, favorable a los varones y perjudicial para las mujeres.

Pero el proceso es irreversible; y sin entrar en complicadas dialécticas, poco útiles ante la clara experimentación, se podía presagiar que incluso en el mundo del Derecho Canónico, quizá el más resistente para ellas, no tardará mucho tiempo sin verlas admitidas a importantes cometidos; posiblemente el judicial para causas matrimoniales sea uno de los primeros; y con muy buenos motivos si además de competencia profesional y de integridad moral reúnen la condición de casadas.

## Francisco de A. Sancho Rebullida

*Catedrático de Derecho Civil  
Universidad de Navarra*

No me parece justificada la exclusión.

Partiendo del dato —hoy *lege lata* y que aquí no se enjuicia— de que los laicos pueden intervenir como jueces en los procesos matrimoniales, siempre que sean canonistas y juristas, la exclusión de las mujeres que reúnan esta condición no puede fundamentarse, a lo que entiendo, en razones empíricas ni en argumentos lógicos.

La circunstancia de que hoy pueda haber pocas mujeres juristas y canonistas —argumento empírico— en nada afecta a las que lo sean; es además, un dato que puede cam-

biar en el tiempo y que, en ningún caso, es susceptible de abstracción y generalización.

La ineptitud, por razón exclusiva de su sexo, de la mujer jurista y canonista, para intervenir como juez en los procesos matrimoniales, me parece un argumento conceptual injustificado y, además, superado en otras áreas.

No encuentro otra explicación que la inercia de la preexistente limitación a los clérigos —que excluye automáticamente a toda mujer— y de la histórica consideración de su incapacidad (*imbecillitas mulierum*).

Si se admite a los laicos —lo cual, insisto, aquí no se prejuzga—, la mujer que sea jurista y canonista puede hacer, en los procesos matrimoniales precisamente, por lo menos tan buen papel como el varón.

## Luis Vacas

*Magistrado del Tribunal Supremo*

Mi opinión leal, como no habría de ser de otra manera, es contraria a que la mujer pueda ser juez laico en los órganos jurisdiccionales colegiados de la Iglesia. Y debo advertir, de entrada, que tal opinión mía —prestada con la urgencia de los pocos días con que se me solicita— nunca podría ser afectada con tacha legal, pues la única hija que tengo se propone ahora, precisamente, iniciar al carrera de Derecho.

Al emitir mi creencia en el sentido en que lo hago, no me hallo influenciado por las ya

trasnochadas opiniones de filósofos como Schopenhauer —las ideas cortas y el cabello largo— ni tampoco por las acerbias críticas que se han hecho a las más progresivas doctrinas feministas, doctrinas por otra parte ya consagradas legislativamente en nuestra Patria.

Me fundo para expresar aquel voto mío negativo en mis personales experiencias como miembro de la Magistratura española, a la que pertenezco desde 1944, y también como Presidente de diversos Tribunales de oposiciones de carácter jurídico, a las que concurrieron varones y hembras. Estas motivaciones ya hablan, por sí solas, de la modestia de que mi opinión, con tal limitado fundamento, ha de estar revestida.

Me parece que la mujer no debe pertenecer a la Judicatura en las facetas de ésta que supongan decisiones sobre conductas personales que comporten, con la censura de las mismas, la adopción de ciertas medidas o de determinadas sanciones. Y ello por razones que tienen su apoyo en profundas raíces de tipo psicológico, porque como sabemos la mujer, al mismo tiempo que propende a la ternura y a la benignidad —innatas en ella— suele apasionarse por causas que sentimentalmente —o temperamentalmente si se quiere— estima justas. Todo lo cual, evidentemente, le ha de impedir ver con la objetividad necesaria, total y absolutamente imprescindible al juzgador, las circunstancias determinantes de un fallo «secundum legem», que aparte de doctrinas más o menos recibidas, es lo que, desde el juramento prestado en su primer destino, se le viene exigiendo al Juez español.

Estas impresiones mías que acabo de exponer han de tener, seguramente, aplicación

al tema objeto de la encuesta, si la materia a que concierne puede ser de referencia, directa o indirectamente, a los Tribunales eclesiásticos de que se trata.

La opinión expuesta no puede afectar, naturalmente, a la aplicación jurisdiccional de otras facetas del Derecho, en las que la mujer puede hacer el papel de un magnífico Juez, como lo hace ya desde hace tiempo entre nosotros en el campo notarial y del registro inmobiliario, en el Secretariado de la Administración de Justicia o en diversos sectores de la Administración pública.

Pero, entiéndase bien, aquellos reparos que formulo deben aceptarse siempre con el más amplio carácter general. Me consta fehacientemente que hay algunas mujeres que pueden realizar funciones jurisdiccionales de cualquier clase, tan bien o mejor que gran parte de esos hombres —entre los que me cuento— que dedican su vida a la alta misión de dar a cada uno lo que es suyo.

## José Zafra Valverde

*Profesor de Derecho Político  
Universidad de Navarra*

Creo que la cuestión no necesita ser planteada directamente en términos de justicia. Caso de hacerlo así, existe el riesgo de que la respuesta proceda de una reacción principalmente emocional, basada en la idea apasionada de la igual dignidad de la mujer con respecto al hombre. Y entonces po-

dría venir fácilmente una réplica fundada en argumentos teológicos más o menos sólidos, como los clásicos paulinos en el sentido de que el varón fue creado primero y que la mujer debe estarle sometida.

El tema debe ser enfocado a mi juicio aplicando un criterio de pura conveniencia práctica. Supongo que la admisión de los laicos en esos procesos obedece, junto a la tendencia general a incrementar su papel decisorio en los asuntos referentes al gobierno de la Iglesia, a la consideración específica de que ellos, como directos conoce-

dores de la realidad matrimonial en sus diversas facetas de orden biológico y psicológico, pueden aportar a las causas matrimoniales un punto de vista complementario basado en la experiencia vivida, que puede ayudar a la más completa comprensión de los casos concretos.

Precisamente por esto, estimo que la exclusión de las mujeres habría de privar a los tribunales de un factor de enjuiciamiento muy valioso, pues el punto de vista de

una mujer sobre la realidad matrimonial vivida por ella no parece que pueda ser perfectamente interpretado ni siquiera por la más aguda y profunda visión de un varón casado.

Y como corolario de lo anterior, pienso que sería conveniente, no sólo admitir a las mujeres en general, sino establecer un riguroso principio de participación paritaria de hombres y mujeres en cada proceso concreto.